

Argentina 1991-2001: Una década de protesta que finaliza en un comienzo. La mirada desde el país interior

Norma Giarracca

La protesta social en la Argentina atravesó la década de los noventa y presentó rasgos distintivos en relación con las expresiones de décadas anteriores. Me refiero a las diferencias con las protestas sociales, gremiales y política de fines de los años de 1960 y comienzo de 1970 (hasta el golpe de estado de 1976) y con las otras, mayoritariamente gremiales, de los primeros años de retorno a la democracia (1983-1989).

En primer lugar, una proporción que llegó a alcanzar el 46,2 % de las protestas en 1999, fue llevada a cabo por sujetos emergentes al margen de las antiguas organizaciones gremiales y sindicales. Por otro lado, las protestas se ubicaron territorialmente en casi todas las regiones del país y las generadas por los actores de origen agrario y residentes en pequeños poblados y ciudades de las provincias, fueron significativas dentro del escenario nacional. En otras palabras, las grandes ciudades no fueron escenarios privilegiados y únicos como en las épocas "industrialistas". En esta misma dirección, las protestas crecieron en intensidad desde las márgenes al centro, es decir desde las regiones del interior del país hacia la ciudad capital de Buenos Aires. Asimismo aumentaron cuantitativamente en los dos años de elecciones de autoridades nacionales (1995 y 1999) y tuvieron muy baja respuesta por parte de los actores demandados tales como el Estado y los empresarios (véase Giarracca, N. y colaboradores, 2001 y Gonda Alejandro, 2001).

Pero, tal vez, el rasgo más significativo de la protesta de los noventa fue el tipo de reclamo que la caracterizó. En efecto, las demandas de las miles de protestas sociales registradas en la década, están fuertemente orientadas a: preservar derechos sociales adquiridos durante el siglo XX (condiciones de trabajo, salarios dignos, educación pública, etc.); preservar pequeños patrimonios familiares (como son los casos de pequeños y medianos empresarios agrarios o industriales amenazados por las deudas); demandar un ingreso mínimo frente a la pérdida del trabajo remunerado (la lucha de los desocupados), etc. Es decir, en general son protestas de “defensa” y “preservación” frente al avance de las políticas “expropiatorias” del neoliberalismo, y en muy pocas ocasiones estas acciones colectivas estuvieron relacionadas con la expansión de nuevos derechos o con la conquista de nuevos espacios políticos o, simplemente, ciudadanos. En tal sentido, no debe confundirse la novedad de la protesta y su nueva matriz cívica (reclamos de vecinos, por ejemplo) con el tipo de reclamo que comportaba.

El otro campo

Como socióloga rural dediqué, con el equipo de investigación, gran parte de la década de 1990 a registrar y comprender las protestas que se fueron generando en los mundos agrarios y rurales. El decreto de “desregulación económica” de fines de 1991, había desbaratado la red institucional que permitió, durante casi todo el siglo XX, la coexistencia de la gran propiedad agraria-ganadera con la pequeña y mediana explotación. A poco de transcurrir la década, pudimos registrar cambios muy fuertes en las imágenes de los mundos agrarios y rurales así como en las de los pequeños y medianos poblados conectados al sector

primario (agrario y extractivo). Comenzaba un cambio muy profundo en el modelo productivo agrario liderado, en gran medida, por las grandes semilleras transnacionales (véase Teubal, M. y Rodríguez, J. 2002).

Las imágenes agrarias de pequeños y medianos productores arrinconados, campesinos expulsados por nuevos inversores, trabajadores rurales y semiurbanos (de pequeños poblados) desocupados, coexistían con los problemas derivados del cambio de las funciones del Estado nacional y el traspaso de la educación, la salud, etc. a la responsabilidad provincial o municipal y con aumentos en las tarifas de los servicios públicos privatizados (véase una interesante protesta por aumentos del agua de una empresa privatizada en Giarracca y Del Pozo, 2002). En efecto, los problemas de la educación pública, los bajos salarios pagados a los maestros, el deterioro de los presupuestos para la salud, para el mantenimiento de las infraestructuras de caminos y puentes, se agravaron y condujeron a los poblados y pequeñas ciudades del interior a situaciones desconocidas por las actuales generaciones. El problema de las inundaciones en la región agraria más rica del país, completó el panorama desolador (Véase *Le Monde Diplomatique*, N° 30, 2001). Es decir, en el interior, mientras por un lado comenzaba el incremento de la producción de cereales en todas las regiones (sobre todo la producción de soja con semillas "transgénicas") reemplazando a cultivos tradicionales como las hortalizas o el algodón (en manos de pequeños y medianos agricultores), la población comenzaba a sentir las peores consecuencias del modelo neoliberal en un contexto de alta desocupación, pobreza e indigencia crecientes.

Las respuestas fueron múltiples, desde formas de adaptación a las nuevas condiciones, la toma de préstamos para "ampliar las escalas de producción", la pluriactividad, las nuevas formas de cooperativas, los pequeños "pool de siembra" (agrupaciones de productores para,

también, superar la escala de producción) etc. Simultáneamente, los distintos sectores comenzaron a manifestarse en el espacio público expresando un fuerte rechazo a esta difusa y compleja política productiva "sin agricultores". Las marchas hacia la ciudad capital y las protestas en general, se llevaron a cabo al margen de las viejas corporaciones agrarias que congregaban a los grandes propietarios. Marchaba y protestaba el campo de los campesinos y los "farmers" empobrecidos y en peligro de perder sus tierras. Una protesta en la Plaza de Mayo, el 8 de septiembre de 1998, acuñó la consigna "el otro campo", apelando a las diferencias entre los dos sectores.

Surgían nuevos movimientos sociales tales como las Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), el Movimiento Campesino Santiagueño (MOCASE). Reaparecían y se fortalecían movimientos de campesinos que habían actuado en la década de los setenta, conocidos como Las Ligas Agrarias pero resignificando las demandas al nuevo contexto (por ej. el Movimiento Agrario Misionero). Los pueblos indígenas tuvieron una presencia desconocida anteriormente en nuestro país, apoyados por algunas comunas europeas y organizaciones ecologistas.

Dos tipos de protesta fueron relevantes en la década del noventa en el país interior: 1) los cortes de ruta en pequeños poblados y 2) la lucha por la tierra.

En 1996 se realizó el primer "corte de ruta" en la provincia sureña de Neuquén, localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, lugar en que la empresa petrolera estatal había reducido su planta debido al proceso de privatizaciones. Los cortes de ruta de esta región se repitieron en 1997, cuando mataron a una joven de 24 años. Simultáneamente comenzaban los cortes de ruta en la provincia de Salta en las localidades de Tartagal y General Mosconi. Las luchas de estas últimas localidades tienen un sentido muy similar a las del Sur pero, a los desocupados, se les sumaban otros actores sociales: poblaciones indígenas, trabajadores

rurales, empleados estatales, etc. Asimismo, son mucho más extendidas en el tiempo. En efecto, hubo cortes de ruta en Salta en 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002. Los desocupados reclamaban y obtenían (siempre menos de los que solicitaban) planes sociales de bajos montos con los que comenzaban proyectos de tipo productivos comunitarios, sin abandonar los cortes hasta el día de hoy.

La lucha por la tierra fue, a mi juicio, el segundo reclamo de gran significación en un país donde no se recordaba este tipo de reclamos desde hacía mucho años (la movilización importante de agricultores que se conoce como el "Grito de Alcorta" en 1912 o las demandas de algunas provincias en las luchas de las Ligas Agrarias en los primeros años de la década de 1970). Esta vez coincidieron reclamos de distintos actores ya que en esta Argentina agraria heterogénea, "la tierra" tiene un sentido polisémico que da lugar a reclamos y demandas diferentes. Así las poblaciones indígenas pidieron legislaciones de "reparación histórica" pues consideraban que ellos y la tierra se pertenecen mutuamente desde antes de la llegada de los españoles; los campesinos pidieron acceder a la tierra que ocupaban y trabajaban desde hacía años y que, repentinamente, fue descubierta por nuevos inversores y, por último, los "chacareros" ("farmers" en la bibliografía anglosajona) lucharon por no perderla pues la consideraban un patrimonio familiar. Las Mujeres Agropecuarias en Lucha llevaron a cabo desde 1995 intensas acciones para impedir los remates de tierras hipotecadas (véase Giarracca y Teubal, 2001).

En síntesis, la protesta de la década tiene como característica importante el peso de los actores del interior del país, sobre todo en aquellas regiones donde "el modelo" se sintió con mayor rigurosidad. Se luchó, básicamente, por el trabajo, por la tierra y por los planes sociales que paliaban la desocupación.

El fin del principio

Este trabajo enuncia en su título que la protesta de la década “finaliza en un comienzo”, marcando de este modo el carácter de acontecimiento del 19 y 20 de diciembre del 2001. No podemos comprender lo que ocurrió en tal fecha si no tomamos en cuenta la década que la precedió, no obstante lo que aconteció en diciembre sólo guarda un “parecido de familia” con las protestas anteriores. Con esto queremos sostener que nada ni nadie podía predecir que tal acontecimiento pudiera suceder basándose en los sucesos y protestas de la década, aunque estas últimas configuraran condiciones de posibilidad para los eventos de diciembre.

Lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre tiene un carácter singular que marca un quiebre, “un antes y un después”. Siguiendo el razonamiento que enunciamos en este trabajo, la rebelión de diciembre, a diferencia de las protestas descritas, no se presenta como una acción en el orden de lo particular, es decir, por reclamos defensivos de sectores particulares (desocupados, maestros, campesinos, etc) sino que se muestra como una acción de ciudadanos donde las identidades sociales quedan suspendidas y donde el reclamo se enmarca en el orden de la política. Se configura como una acción colectiva particular, que es la “desobediencia civil” (al “estado de sitio” aplicado por el gobierno) y por otro lado (o tal vez por ello mismo), abre un espacio en el que se produjo una falla en el sistema de representación. Aunque inmediatamente se intentó, por parte de la mayoría de los actores conocidos, reconstruir la inconsistencia, volver a la “representación”, el acontecimiento marca un antes y un después y muy poco podemos decir hoy acerca de sus consecuencias futuras.

El epicentro del fenómeno fue la ciudad capital y sus alrededores. El país interior se ubicó más como expectante que como activo miembro del acontecimiento. Si exceptuamos algunas capitales de provincia como Córdoba y Neuquén, pocas fueron las manifestaciones del interior o por lo menos no tuvieron la misma visibilidad y fuerza que las de la ciudad capital y Buenos Aires. El acontecimiento tiene carácter nacional, sin duda, por razones diferentes a las territoriales. La demanda "que se vayan todos, que no quede ni uno sólo", arriesgamos, tiene un sentido distinto para el centro del acontecimiento y para las "márgenes del castillo" (Colombo, A., 2002). Las redes de clientelismo con los punteros políticos, no sólo de intendentes y gobernadores sino de diputados provinciales y nacionales, así como la fuerte dependencia de la población a los planes sociales, en una sociedad, además, donde las relaciones "cara a cara" priman, el repudio directo a la clase política y al sistema de representación se complica. Aún así, sucedieron estallidos contra los dirigentes políticos como el "santiagueñazo" en 1993, y en esa misma semana de diciembre otros en varias ciudades. No obstante, el "que se vayan todos" comportó una acción colectiva que se mantiene aún hoy mediante asambleas y movimientos con propuestas en el orden de la política (que no significa, necesariamente, la compulsa electoral).

Se abre así un gran desafío para quienes seguimos las protestas del interior: abordar en qué medida y con qué sentidos, las provincias experimentaron esos acontecimientos. A nueve meses de los sucesos de Buenos Aires, las poblaciones de dos provincias del Norte (Tucumán y Jujuy) salieron en marchas multitudinarias bajo la emblemática consigna "que se vayan todos". Pero en el interior como en Buenos Aires, la crisis social se profundiza y las viejas protestas se multiplican aunque ahora coexisten con las asambleas barriales (que disminuyen en la ciudad capital pero aparecen nuevas en ciudades del interior), los movimientos

nacionales de piqueteros y las fábricas ocupadas, que son las nuevas expresiones pos-rebelión de diciembre de 2001.

Bibliografía citada

Colombo, A. (2002, octubre) *Estas rebeliones*. [On line] Disponible www.forodesobedienciacivil.com

Giarracca, N. y colab. (2001) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Giarracca, N. y Teubal, M. (2001). "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha", en Giarracca, N. y colab. (2001) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Giarracca, N. y Del Pozo, N. (2002) "The Social protest for Water in Toucan". *Defend the Global Commons*, 1 (1).

Gonda, A. (2002) El Conflicto Social dentro del plan de convertibilidad. Argentina 1991-2001 *Informe de la Consultora de Investigaciones Sociales Independientes (CISI)*.

Teubal, M. y Rodríguez, J. (2002) *Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica*. Buenos Aires: La Colmena.